

Plante de los funcionarios de prisiones en protesta por el último asesinato de ETA

En doce centros penitenciarios, la plantilla se negó a trabajar

El atentado contra el funcionario de la cárcel de Martutene Ángel Mota, que falleció a primera hora de la tarde de ayer tras veinte horas en coma profundo, provocó una amplia movilización de los centros penitenciarios, en doce de

los cuales los funcionarios se negaron a entrar a trabajar. En otras veinte prisiones la plantilla se declaró en «paro técnico», hasta el punto de que fueron los mandos los que tuvieron que realizar servicios como el reparto de comidas.

Madrid. S. N.

Ángel Mota Iglesias, funcionario de la cárcel de Martutene, falleció en el hospital de la Cruz Roja de San Sebastián a primera hora de la tarde de ayer, después de permanecer veinte horas en coma profundo a consecuencia del disparo que recibió en la nuca. El funcionario, de treinta y un años de edad, casado y con dos hijos, fue tiroteado por dos jóvenes que se dieron a la fuga en una motocicleta, a las ocho menos diez de la tarde del martes en la calle Matías de San Sebastián.

El atentado perpetrado contra el funcionario de prisiones provocó ayer una movilización de los trabajadores de instituciones penitenciarias que ha afectado a la mayoría de los centros. En las tres prisiones del País Vasco, Martutene, Basauri y Nanclares de Oca, y en la de Zamora, localidad natal de Ángel Mota, los funcionarios permanecieron en asamblea durante toda la noche y los del turno de día se negaron a entrar a trabajar, concentrándose en el exterior de los centros.

El director general de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción, se desplazó en la mañana de ayer a la cárcel de Martutene y mantuvo una reunión con los funcionarios que se prolongó durante cuatro horas.

Asunción, que acudió al hospital de la Cruz Roja y se entrevistó con los familiares de Ángel Mota, declaró que los funcionarios demostraron «una gran capacidad de respuesta y no entrarán en provocaciones» y que han planteado la posibilidad de planificar los destinos y limitar la permanencia de los funcionarios en las cárceles vascas.

La protesta iniciada en los centros del País Vasco se extendió a las cárceles de Alicante, El Dueso, Burgos, Alcalá-2, Cáceres 1 y 2, Palma de Mallorca y complejo penitenciario de Carabanchel, en las que los funcionarios del turno de mañana se negaron a entrar a trabajar y se concentraron en el exterior de las prisiones.

La situación fue especialmente tensa en Carabanchel, donde, según el portavoz de la Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP), Federico



Mata, la prisión quedó «en manos de los presos», al serles abiertas las celdas ante los gritos y el aporreo de las puertas que los internos llevaron a cabo. Mata agregó que la situación de Carabanchel-1, donde se encuentran dos mil internos, fue puesta en conocimiento del Juzgado de Guardia.

Asimismo, según fuentes sindicales, la Policía intervino en el centro Cáceres-2, donde los presos se habían amotinado.

En la prisión grancanaria del Salto del Negro, un centenar de presos se amotinó al mediodía en el tejado del centro, en protesta por la decisión de los funcionarios de negarse a realizar los servicios habituales. Los internos permanecieron en la azotea algo más de una hora y abandonaron su acción tras dialogar con el director de la cárcel.

La postura de «brazos caídos» adoptada en el Salto del Negro fue secundada en otras dieciocho prisiones, entre ellas Herrera de La Mancha (Ciudad Real) y Sevilla-2, que siguen concentrando el mayor número de presos de ETA.

En concreto, en Sevilla-1, Granada, Puerto de Santa María 1 y 2, Córdoba, Almería, Huelva, Albacete, Badajoz, Castellón, Cuenca, Jaén, Monterroso, Salamanca, Vigo y Lugo los funcionarios entraron en los centros, pero se negaron a realizar los servicios, entre ellos la apertura de celdas. En muchos casos, los directores, subdirectores y administradores de los centros reali-

zaron personalmente tareas como el reparto de comidas.

En prisiones como las de Ávila, Alcázar de San Juan, Huesca y Zaragoza se llevaron a cabo paros parciales, y las de Ocaña, Ciudad Real, Pamplona y Murcia funcionaron con servicios mínimos.

En Barcelona, unos cuarenta funcionarios de la Modelo cortaron durante quince minutos el tráfico de la calle Entenza, frente al recinto penitenciario, y llevaron a cabo un paro entre las ocho de la mañana y las once quince horas de ayer, según informa **José Clemente**.

Las centrales sindicales UGT y CC. 00. han convocado a los funcionarios de prisiones a realizar un paro laboral de veinticuatro horas a partir de las ocho de la mañana de hoy, en protesta por la falta de medidas de seguridad que sufre el colectivo de instituciones penitenciarias y la «pasividad» de la Administración en el cumplimiento de los acuerdos que se pactaron el pasado mes de agosto.

La UFIP ha anunciado su adhesión a los resultados de las asambleas que se han celebrado en los centros para decidir las medidas de presión, aunque ha recomendado no entrar a trabajar.

Por su parte, la CSIF ha instado a todos los trabajadores de instituciones penitenciarias a un paro indefinido hasta que la Administración cumpla los acuerdos firmados en materia de seguridad.

CSIF cree que la generosidad con ETA humilla a sus víctimas

Madrid

La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) considera, en un comunicado publicado ayer, que «las declaraciones del ministro del Interior, José Luis Corcuera, en el sentido de ofrecer "generosidad" a ETA si esta banda criminal deja seis meses de matar, suponen una clara humillación a las víctimas del terrorismo, además de ser injustas por ir en contra del ordenamiento jurídico».

Igualmente la Ejecutiva del sindicato USO-Prisiones pidió al ministro de Justicia, Enrique Múgica, que destituya al director general de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción, así como la dimisión del propio ministro. USO acusa a Múgica de realizar una política que «pone en el asador terrorista al funcionario» al no haber adoptado las medidas de protección adecuadas.

Por su parte, la Coordinadora Gesto por la Paz ha convocado para hoy concentraciones en diversas localidades del País Vasco como medida de repulsa,

Representantes de los partidos políticos vascos, excepto la coalición pro etarra Herri Batasuna, condenaron el atentado que causó la muerte a Ángel Mota Iglesias, al tiempo que acusaron de cinismo a la banda criminal por emitir, horas antes del atentado, un comunicado en el que anunciaba la posibilidad de una tregua.

El portavoz del PNV, José Guibarr, manifestó que con esta acción criminal «está claro que ETA no tiene intención de dejar de matar».

La familia no quiso funeral institucional

Madrid

El Ministerio de Justicia expresó ayer a través de un comunicado su «pesar» por el asesinato del funcionario de Instituciones Penitenciarias Ángel Mota Iglesias y suscribe la «repulsa de estos crímenes fanáticos».

En un comunicado hecho público a última hora de la tarde de ayer el Ministerio señala su «respeto más absoluto» ante la decisión de la familia del funcionario, que sufrió ayer un atentado terrorista, de celebrar en la más estricta intimidad las honras fúnebres.

El Ministerio de Justicia tenía la intención de instalar la capilla ardiente con los restos de Ángel Mota en la sede del Gobierno Civil y llevar a cabo un acto funeral público.